

El nuevo curso político

ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO*

TRAS las elecciones del 10 de junio y la formación de los nuevos gobiernos autonómicos y ayuntamientos, las fuerzas políticas van a dedicar el curso político que empieza a un esfuerzo de acomodo y adaptación a la situación surgida de aquella consulta electoral. El nuevo mapa político, caracterizado por la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PSOE, va a poner a prueba el sentido democrático de este partido, encastillado en posiciones de prepotencia desde que, en 1982, asumió los poderes del Estado. Nada afecta, desde luego, a la sólida posición mayoritaria que el PSOE tiene en ambas Cámaras, en las que podrá seguir aplicando su «rodillo», pero no cabe duda de que los socialistas se van a ver obligados a ejercer su poder con un nuevo estilo más dialogante. La autocrítica, que ha brillado por su ausencia en estos últimos años, ya ha hecho acto de presencia y las diferencias internas del partido, apenas perceptibles hasta ahora, empiezan a manifestarse abiertamente.

Los cinco años de poder han desgastado seriamente al PSOE, que se enfrenta ahora con una crisis de identidad. El XXXI Congreso del partido, a celebrar a principios de 1988, será la ocasión que aprovecharán las diversas tendencias para intentar que sus criterios sean tenidos en cuenta, beneficiándose además en el reparto de las tajadas de poder. El liderazgo de Felipe González y la ortodoxia económica en que se plasma, que reduce el socialismo a una especie de «capitalismo solidario», han dejado de ser indiscutibles. El congreso puede ser la oportunidad para que no sólo la UGT o la organizada tendencia de Izquierda Socialista, sino otros sectores, como los representados por Leguina o Rodríguez de la Borbolla, reclamen cuotas de influencia en el partido y exijan reformas programáticas.

El PSOE, que ha perdido ya casi una tercera parte de los votos con los que llegó al poder en 1982, tendrá que explicar a sus militantes y a sus electores el porqué de una política que ha producido tanta decepción en muchos sectores de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, y como los demás partidos políticos, deberá preparar las nuevas elecciones europeas, que deben celebrarse el 1989, decidiendo si, a la vez, le conviene afrontar nuevas elecciones generales, previa disolución de las Cortes elegidas en 1986. Antes aún se celebrarán, en 1988, las

* Salamanca, 1934. Catedrático de Opinión Pública de la Complutense. Doctor en Derecho y comentarista político.

elecciones autonómicas catalanas que, según todas las previsiones, darán un nuevo triunfo a Jordi Pujol y una nueva derrota regional al PSOE.

Es bien sabido que el PSOE se mueve en función del «Horizonte 92». La mayor aspiración de los socialistas españoles es continuar en el poder en ese año clave de 1992, fecha de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla y, además, de la puesta en pleno vigor del Acta Única y de nuestra integración total en la CEE. Apenas hace unos meses, los socialistas no dudaban de que esa aspiración era razonablemente factible. Hoy las cosas se presentan mucho más complicadas y los socialistas saben que no tienen ganado nada por anticipado.

La mayor baza del PSOE sigue siendo, una vez más y paradójicamente, la desunión de sus adversarios políticos del centro derecha. AP, CDS, CiU y los demás grupos regionalistas que acampan en ese espacio político son vagamente conscientes de que, sin un sólido entendimiento entre ellos, las posibilidades de sustituir al desgastado PSOE son remotas. Pero no dan pasos efectivos en el camino de la unión, fiándolo todo a hipotéticos pactos poselectorales como si la magia de los resultados pudiera por sí sola superar los obstáculos ante los que las voluntades se han zafado previamente.

AP sigue sin estar a la altura de la primogenitura que le corresponde en la oposición como mayor partido de la misma. El equipo de jóvenes políticos de procedencia regional que asumió hace siete meses las riendas del partido, tras la dimisión de Fraga varias semanas antes, ha sido incapaz, por el momento, de dar al partido de la derecha el impulso que necesitaba.

Hernández Mancha hace enormes esfuerzos por existir políticamente, pero sus intervenciones públicas dejan, frecuentemente, una irremediable sensación de *amateurismo*. A diferencia de lo que sucede en países como Alemania Federal o los Estados Unidos, donde las instancias regionales de poder son la escuela donde se forman los dirigentes nacionales, AP ha puesto a su cabeza a un hombre joven sin experiencia previa de gobierno regional o de trabajo parlamentario, sin ningún triunfo electoral en su ejecutoria y que, en contra de lo habitual en cualquier democracia parlamentaria, no dispone de escaño en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, su vago populismo no se ha plasmado en un mensaje político concreto ni un conjunto de propuestas capaces de sensibilizar al electorado.

En estas condiciones, el papel de locomotora de la alternativa, que lógicamente correspondería a AP, encuentra serias dificultades y las propuestas «federadoras» de Mancha, que intenta reunir en una especie de nueva CEDA a los grupos regionales de centro derecha, están siendo escasamente escuchadas. Su estatura política queda muy por debajo de lo que representa un Jordi Pujol, cuyo prestigio ascendente puede

LAS DEBILIDADES
DÉLA OPOSICIÓN

consolidarse aún más si, como apuntábamos más arriba, obtiene una nueva victoria en las próximas elecciones autonómicas catalanas. La sombra de la fracasada «operación reformista» de 1986 impide, sin embargo, que, hoy por hoy, el liderazgo de Pujol tenga una proyección extracatalana. Peculiaridades de nuestra política y consecuencias de los nacionalismos periféricos que serían inconcebibles en ningún otro país con estructura regional o federal. Mientras California o Badén-Wurtemberg son trampolines privilegiados para lanzarse a la política nacional en sus respectivos países, aquí Cataluña o el País Vasco viven como reductos, con mínima proyección hacia el plano estatal-nacional.

Esas ideas de Mancha son aún peor recibidas por parte del CDS, cuyo líder, Adolfo Suárez, parece decidido a jugar a fondo su política de no compromiso con nadie. Las limitaciones del proyecto suarista son, sin embargo, bien evidentes. Pese a sus pretensiones, el CDS no puede por sí solo constituir una alternativa al PSOE y, en contra de sus afirmaciones, no representa en este momento sino un típico partido bisagra a pesar de que, según parece, su grupo parlamentario se verá incrementado por Jorge Verstrynge y los demás diputados que abandonaron con él AP en 1986, y que se convertirían en el ala derecha del suarismo. El CDS, por otra parte, carece de un programa coherente y ni en política económica ni en política exterior y de defensa posee el mínimo exigible de racionalidad y coherencia. Con motivo, por ejemplo, de las maniobras navales «Ocean Safari», en las que ha participado España, el CDS de Canarias, que dirige el Gobierno de esa Comunidad Autónoma, ha unido su voz a las de los partidos que, en ejercicio de su posición anti-OTAN, han protestado por la participación española en dichas maniobras.

El CDS es considerado por algunos como un partido caudillista sin más activo que el carisma de su líder. Suárez, el primero, como los militantes que le siguen con una lealtad personal de resonancias quasifeudales, están convencidos de su capacidad para regresar a la Moncloa. Pero, como quedó demostrado en las elecciones del pasado mes de junio, su penetración en el electorado está sometida a serias limitaciones que han hecho pensar a muchos que Suárez tiene un «techo» ya rozado por sus últimos resultados. Quien ganó, desde la Moncloa, las elecciones de 1977 y 1979 se enfrenta ahora con una situación nueva: la de lograr una victoria electoral o, al menos, unos buenos resultados desde la oposición, lo que en este país siempre ha sido mucho más difícil.

UN PANORAMA CONFLICTIVO

Mientras tanto, el panorama que se le presenta al Gobierno en este otoño de 1987 no es en absoluto alentador, aunque la euforia de la Bolsa y la ola de consumismo desatado que vive nuestro país han dado pie para un cierto optimismo. Es patente que el presidente González ha apostado con fuerza por la idea de la concertación social, a la que

dedicó la mayor atención y tiempo en las semanas anteriores a las vacaciones agosteñas. Las resistencias de las grandes centrales sindicales, UGT y CC.OO., que han reencontrado en la ocasión la unidad de acción perdida hace mucho tiempo, ha echado por tierra la primitiva idea presidencial de una concertación para tres años y han acreditado la imagen de un Gobierno socialista aparentemente más en consonancia con la gran patronal, CEOE, que con los sindicatos.

Resulta difícil saber en este momento cómo acabará el proyecto de concertación, pero, con ese cabo suelto, la incertidumbre va a planear sobre la acción gubernamental. Con la concertación, el presidente intenta evitar que se reproduzca la oleada de conflictividad social que tanta tensión produjo durante el primer semestre de 1987. Nadie puede asegurar, en este momento, que no se vayan a repetir tales situaciones. La huelga de controladores de Barcelona, a mediados de agosto, que tanta repercusión tuvo en el ámbito turístico y en la propia imagen de nuestro país en el exterior, podría haber sido un desagradable anticipo de un «otoño-invierno caliente», que produciría serios quebraderos de cabeza al Gobierno. En el ámbito universitario, los nuevos planes de estudio, ya contestados a finales del curso anterior, podrían ser pretexto para nuevas agitaciones estudiantiles.

Por otra parte, el panorama económico presenta serios nubarrones que pueden aguar el optimismo de que viene haciendo gala el Gobierno. Las previsiones para 1988, hechas públicas en los primeros días de septiembre, contemplan un alivio en la presión fiscal, una inflación de sólo el 3 por 100 y un crecimiento de los salarios «en torno al 4 por 100», además de un modesto aumento de los nuevos empleos. Pero frente a este optimismo no se puede por menos de tener presentes otras consideraciones relativas a situaciones que escapan al control del Gobierno en buena medida. La coyuntura internacional presenta síntomas preocupantes y los analistas perciben atisbos inflacionistas que podrían incidir en los tipos de interés dificultando la inversión, el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. En tales condiciones, la recesión podría estar a la vuelta de la esquina. Varias revistas internacionales se han ocupado recientemente de tales previsiones pesimistas y, en algún caso, sin duda con exageración, se ha llegado a hablar de una repetición del «crack» de 1929. La explosiva situación del Golfo es un factor añadido que, ciertamente, no va a hacer más fáciles las cosas.

Estos datos negativos no dejarán de tener, por supuesto, una incidencia en la economía española, cuyo PNB se estima que puede crecer en 1987 un 4 por 100 e incluso un poco más. Esta tasa situaría a nuestro país, por su ritmo de crecimiento, a la cabeza de los países industrializados. La evolución de la coyuntura ha enfriado, no obstante, tales previsiones y, en el mes de agosto, José M.^a Cuevas, presidente de la CEOE, afirmó que habrían de corregirse a la baja.

Una serie de datos y noticias económicas conocidas durante el mes de agosto han confirmado la necesidad de cautelas. Así, el IPC de julio, con un aumento del 1 por 100, que pone en peligro el propósito del Gobierno de terminar el año con sólo un 5 por 100 de inflación, aunque las autoridades económicas siguen haciendo gala de un notable voluntarismo. También se ha conocido la situación de la balanza comercial, que a finales de julio presenta un déficit de más de un billón de pesetas, lo que pone a nuestro comercio exterior en una delicada situación, paliada gracias a los ingresos del turismo y a la entrada de capitales extranjeros. El déficit público sigue también creciendo de modo desaforado y muy por encima del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Y el paro continúa siendo el más abultado de toda la CEE, a pesar de que el Gobierno ha aprovechado el verano para alterar el procedimiento de medición de tal magnitud, lo que ha producido una ligera baja en el número oficial de parados que, evidentemente, no se corresponde con la realidad.

Se ha publicado igualmente el «Informe Económico del Banco de Bilbao 1986», que destaca el aumento de las desigualdades, tanto personales como territoriales, en la distribución de la renta, así como el menor porcentaje que tienen las rentas de trabajo en el conjunto del PIB, hecho que ocurre por primera vez en nuestro país. El «Informe» termina señalando que España sigue siendo un país «en vías de desarrollo», aunque le quepa el dudoso honor de ocupar la cabeza en la lista de los que se hallan en tal situación.

El panorama que resulta de tales elementos no es en absoluto halagüeño y se configura así un escenario que no va a facilitar la tarea del Gobierno.

El otro gran problema que está incidiendo sobre la acción gubernamental es el terrorismo de ETA, que durante todo el verano ha llevado a cabo continuos atentados con resultados de muerte. A mediados de agosto, el Ministerio del Interior anunciaba que ETA estaba dando pasos para reconstruir el «comando Madrid». Todo ello pone en evidencia una capacidad operativa que supone un mentís para quienes hablan de una ETA en la fase final de su historia y en trance de rendición incondicional.

Precisamente, el tema de las negociaciones con la organización terrorista vasca ha sido uno de los que han ocupado la atención periodística en el último tramo del verano. El presidente González, al salir de su encuentro con el presidente Mitterrand en el sur de Francia, reiteró su oposición a toda negociación política, pero dejó la puerta abierta a un diálogo que contribuyera a la erradicación del terrorismo sin contrapartidas políticas. González no aclaró cuál podría ser el contenido de tal diálogo, por lo que, después de sus declaraciones, la cuestión de las negociaciones con ETA ha quedado envuelta en la máxima confusión, suscitando, además de una

prolongada polémica periodística, preguntas parlamentarias a cargo de partidos de la oposición. El PSOE ha iniciado una serie de contactos «discretos» con los restantes partidos con finalidades informativas y, quizá, intentando alcanzar una especie de pacto nacional sobre la cuestión.

Los problemas apuntados más arriba no son los únicos, aunque quizá sí son los más importantes, con los que habrá de bregar el Gobierno González en el curso político que comienza. Un curso que presenta todas las características de un período de transición entre la época de la arrogancia socialista y nuevas situaciones políticas que ya se están fraguando, aunque no sea posible, por el momento, señalar cuáles vayan a ser sus líneas maestras.

Algunas de esas futuras realidades se van configurando, sin duda, en las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales cobrarán un dinamismo político inédito hasta el momento. La situación de Galicia, feudo tradicional de AP, presenta una singular complejidad y no pueden descartarse acontecimientos que podrían determinar la caída del Gobierno de Fernández Albor e incluso nuevas elecciones en el Parlamento regional, aunque el Estatuto no prevé la disolución anticipada. En todo caso, ante unas nuevas elecciones, el candidato de AP podría ser Fraga, lo que marcaría otra peculiaridad de nuestra política. Mientras en los países con estructuras federal o similar, los políticos pasan de lo regional a lo nacional, aquí seguirían el trayecto contrario...

Otras Comunidades con gobiernos minoritarios podrían registrar también acontecimientos que alterarían y quizá animarían el curso político. Lo que parece obvio es que nada será igual que antes, cuando el dominio absoluto del PSOE limitaba al máximo la posibilidad de sorpresas.

Mientras tanto, la España profunda vive de espaldas a la política, jugando a la Lotería Primitiva, esto es, confiando más en la suerte que en las oportunidades brindadas por el entorno económico y social para mejorar su vida. Mientras tanto, el consumo crece aceleradamente (ahí está una de las razones, las importaciones masivas, del desequilibrio del comercio exterior) mientras el ahorro nacional es muy escaso. Esta situación suele considerarse como un índice de falta de confianza en el futuro. Muchas cosas tienen que cambiar en nuestro país y en las mentes de los españoles para que nos pongamos en condiciones de responder adecuadamente al reto europeo.

*TRANSICIÓN
Y COMPÁS DE ESPERA*